A la Nación.

La factura sin la obra.

Manifiesto de la Dirección Nacional de Centrados en la Gente por una deuda que no comprometa el porvenir.

Ningún pueblo debe pagar la deuda que otros contrajeron para saquearlo. Hay cifras que no son cifras: son sentencias. El régimen de Delcy Rodríguez, reafirmando su sumisión colonial, ha aceptado que la deuda venezolana asciende a 237.544 millones de dólares al cierre de 2025, y probablemente ya este año aumente en unos 2.000 millones más. Son casi ocho mil dólares por cada venezolano, que pagarán sobre todo los que todavía no han nacido. No es un dato menor ni una disputa contable: es la cuenta más alta que se haya pasado a un país. Conviene nombrarla sin rodeos, porque nombrar con exactitud también es una forma de denuncia: es una deuda desmesurada, inflada e impagable.

Pero hay algo más grave que el monto, y es su naturaleza: nos legaron la factura sin la obra. Lo que se tomó prestado no está en un hospital, ni en un aula, ni en una carretera, ni en una represa que todavía produzca electricidad. Está en intereses, en sobreprecios, en pagos sin destino verificable. Ese es el sentido exacto de la palabra saqueo: no se endeudó al país para construirlo, se lo endeudó para sostener un poder que se consumía a sí mismo. Un Estado gasta por encima de lo que recauda y cubre el hueco con préstamos: primero colocaciones internas en bolívares, después financiamiento externo, por último, la puerta del Banco Central. De ahí salió la espiral inflacionaria que se desbordó a partir de 2010 y que desembocaría en hiperinflación. El 95% de esa deuda se contrajo bajo la administración de Hugo Chávez, y su monto supera con creces los 150.000 a 200.000 millones que calculaba la mayoría de los inversionistas. Los bonos subieron porque el mercado lee en el llamado Plan Renace la señal de que habrá acuerdo; Reuters describió ese documento como el retrato más completo de las finanzas venezolanas en más de una década. Pero el retrato, por completo que sea, no vuelve menos grave la realidad que describe.

A ese cuadro se suma PDVSA: en 1998 debía unos 5.000 millones de dólares; al cerrar 2012, la cifra había llegado a 50.000 millones. En noviembre de 2017 Maduro anunció que no podía seguir pagando. Desde entonces, entre el impago y los reclamos de tenedores de bonos sin cobrar, los intereses de la República y de la petrolera se acumularon hasta sumar otros 50.000 millones, contabilizados entre ese mes y el cierre de 2025.

Hemos visto lo que queda cuando se paga la factura sin la obra. Hemos visto un hospital donde el médico ausculta con un estetoscopio prestado y el paciente trae su propia gasa. Hemos visto un aula sin docente. Hemos visto una cola de madrugada por un medicamento que no llega. No son metáforas: son la contabilidad del otro lado del balance. Cada dólar que se destine a intereses es un dólar que no llega a esa aula, a esa camilla, a esa cola. Por eso hablamos sin

cálculo y sin aspaviento, y por eso decimos con claridad desde dónde hablamos: somos un partido, Centrados en la Gente, y no lo ocultamos. Pero hay asuntos que no pertenecen a ningún partido sino a todos los venezolanos, y este es uno: la deuda la van a pagar quienes todavía no han nacido, y a ellos no se les puede pedir el carnet.

Esta deuda exige una renegociación capaz de estirar plazos y aceptar descuentos, pero la sensatez tiene exigencias que no admiten excepción. No habrá renegociación seria sin un equipo venezolano sentado a la mesa; hoy ese equipo no existe, porque las conversaciones las lleva Centerview Partners, una empresa escogida por Estados Unidos, y no consta la participación de técnicos venezolanos. Tampoco debería iniciarse reestructuración alguna antes de que, como ha dicho el economista José Guerra, haya un informe público de sostenibilidad fiscal, que dirá cuál es la capacidad real de pago de la República: si esto se hace mal, le cargarán al país intereses que no podrá pagar y que se tragarán el presupuesto nacional. Y no debería haber acuerdo sin el Fondo Monetario Internacional, que sencillamente haría el análisis técnico de sostenibilidad fiscal. Son condiciones, no adornos.

Por eso hacemos pública una exigencia concreta: que no se firme ningún acuerdo de reestructuración sin esas dos condiciones. Pedimos a los acreedores y a los organismos internacionales que se nieguen a avalar cualquier arreglo que las omita. Quien firme sin cumplirlas no habrá negociado: habrá entregado.

Cualquier reestructuración debe hacerla, y esto es fundamental, un gobierno legítimo. Porque se emitirá una deuda en sustitución de esta, con plazos de 10 a 20 años, y eso tiene que hacerlo un gobierno electo por el pueblo venezolano.

Es inaceptable que este régimen autorice y suscriba la renegociación de la deuda, un asunto tan vital para el futuro de los venezolanos. No se trata solo de una cifra; se trata de la firma que compromete a las próximas generaciones. Por eso lo decimos con sobriedad y con firmeza: la deuda no puede renegociarse a espaldas del pueblo ni sin un gobierno electo. El porvenir no es una prenda que se empeña. Es lo único que todavía nos pertenece.

Dirección Nacional de CENTRADOS en la GENTE

José Luis Farías
Secretario General

Caracas, 28 de noviembre de 2026.